

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio No. 139.

PROCESO:	76001-33-33-001-2022-00051-00
MEDIO DE CONTROL:	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DEMANDANTE:	ASTRID DEL PILAR BETANCOURT GAVIRIA
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

1. ASUNTO

Procede el Juzgado a pronunciarse sobre el acuerdo conciliatorio celebrado el día 07 de marzo de 2022, entre la señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria y la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ante la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos, tal como consta en el acta de audiencia de conciliación glosada en el expediente digital.

El presente acuerdo conciliatorio se soporta en los siguientes

2. HECHOS

- 2.1.** Que la señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria, mediante petición radicada el día 11 de julio de 2019, solicitó ante la Secretaria de Educación del municipio de Santiago de Cali – Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de unas cesantías parciales.
- 2.2.** Que la Secretaria de Educación del municipio de Santiago de Cali, a través de la Resolución No. 4143.010.21.0.05298 del 17 de julio de 2019, ordenó reconocer por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a favor de la señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria, la suma de \$ 21.777.747, por concepto de liquidación de cesantías parciales. Este acto administrativo fue notificado el 18 de julio de 2019.
- 2.3.** Que a través de la Resolución No. 4143.010.21.0.08650 del 30 de octubre de 2019, la Secretaria de Educación del municipio de Santiago de Cali, da cumplimiento a lo determinado por la Fiduciaria S.A., reconociendo a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterios unas cesantías parciales a

favor de la señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria, por la suma de \$ 21.777.747, siendo canceladas las cesantías el 03 de enero de 2020.

2.4. Que la señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria, mediante petición radicada el día 28 de julio de 2021, ante la Nación-Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006, como consecuencia del retardo en el pago de sus cesantías.

2.5. Que ante el silencio negativo de la entidad, la convocante, con el fin de dar cumplimiento al requisito de procedibilidad contenido en el numeral primero del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, elevó solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público.

2.6. Que en virtud de lo anterior, la entidad convocada propuso fórmula conciliatoria frente al pago deprecado por la convocante.

3. ACUERDO CONCILIATORIO

La audiencia de conciliación extrajudicial fue celebrada ante la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos, el 07 de marzo de 2022, donde se acordó lo siguiente:

“...La posición del Ministerio es CONCILIAR en la audiencia programada por el Despacho con ocasión a la convocatoria a conciliar promovida por ASTRID DEL PILAR BETANCOURT GAVIRIA con CC 66902640 en contra de la NACION -MINISTERIO DE EDUCACION -FOMAG, cuya pretensión es el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías (CESANTÍA PARCIAL PARA COMPRA -PRESUPUESTO ORDINARIO) reconocidas mediante Resolución No. 8650 de 30 de octubre de 2019. Los parámetros de la propuesta son los siguientes:

Fecha de solicitud de las cesantías: 11 de julio de 2019.

Fecha de pago: 16 de diciembre de 2019.

No. de días de mora: 69.

Asignación básica aplicable: \$ 3.303.158.

Valor de la mora: \$ 7.597.245.

Propuesta de acuerdo conciliatorio: \$ 6.837.520 (90%).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, numerales 3.2 y 3.5 del Acuerdo No. 001 de 1 de octubre de 2020, la presente propuesta se encuentra estructurada conforme a la información suministrada en la convocatoria a conciliar, en razón a que la sanción moratoria es un derecho de carácter discutible y conciliable, que se reclama a través de la denominada justicia rogada. Lo anterior, atendiendo a que corresponde a las entidades estatales la salvaguarda del patrimonio público.

Tiempo de pago después de la aprobación judicial de la conciliación: 1 MES (DESPUÉS DE COMUNICADO EL AUTO DE APROBACIÓN

JUDICIAL). No se reconoce valor alguno por indexación. La presente propuesta de conciliación no causará intereses entre la fecha en que quede en firme el auto aprobatorio judicial y durante el mes siguiente en que se haga efectivo el pago.

(...)

Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocante para que manifieste su posición frente a lo expuesto por la parte convocada: acepto la propuesta presentada por la apoderada de la convocada en su totalidad.

(...)

Por último considera este Despacho que el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes se ajusta integralmente a las reglas jurisprudenciales definidas en la Sentencia de unificación de jurisprudencia SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018 proferida por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, de tal suerte que no solo es ajustado a derecho sino que adicionalmente favorece al patrimonio público en cuanto es menos oneroso de lo que resultaría la resolución judicial del conflicto, evento en el cual se avizora una altísima probabilidad de condena, habida cuenta de los antecedentes facticos de la controversia y de su respaldo probatorio arrimado con la solicitud de conciliación. En este punto conviene resaltar que a la luz de las reglas jurisprudenciales previamente referidas, luce claro para el Ministerio Público que el plazo para el pago efectivo de la cesantía solicitada por la señora ASTRID DEL PILAR BETANCOURT GAVIRIA venció el 08 de octubre de 2019 y como quiera que los recursos relacionados con este concepto fueron puestos a su disposición el 16 de diciembre de 2019, es forzoso concluir que durante el periodo comprendido entre el 08 de octubre de 2019 y el 16 de diciembre del mismo año se produjo la mora de que trata la ley 1071 de 2006 y por lo mismo hay lugar al pago de la sanción moratoria durante el periodo liquidado por la entidad convocada en la propuesta que se allega, operación que al tener como base un porcentaje inferior a la totalidad que estaría llamada a pagar en el evento de una condena judicial resulta favorable para el patrimonio público, amén de que no están dados los presupuestos señalados en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social para que se configure la extinción de la sanción por causa de la prescripción. Por las razones expuestas se avala por parte de este Agente del Ministerio Público el acuerdo celebrado en esta audiencia. (...)"

Esta conciliación tuvo fundamento en la certificación expedida el día 16 de febrero de 2022, por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación del Ministerio de Educación Nacional, en donde la entidad convocada elevó la formula conciliatoria antes descrita.

El apoderado de la convocante manifestó en cuanto a la fórmula “*acepto la propuesta presentada por la apoderada de la convocada en su totalidad*”.

Conforme a anterior, procede el Juzgado a pronunciarse sobre la conciliación extrajudicial antes citada, previas las siguientes

4. CONSIDERACIONES

En principio, debe indicarse que la conciliación en el derecho administrativo es un importante mecanismo para la composición de los litigios que pueden suscitarse a través de los medios de control consagrados en los artículos 138, 140, y 141 del CPACA y en ese orden coadyuva a la descongestión de los despachos judiciales con el fin de asegurar un eficaz acceso a la Administración de Justicia, tal y como lo ordenan el Preámbulo y los artículos 2 y 229 de la Constitución Política. Esta consideración debe ser consecuente con la debida utilización que se pueda hacer de ésta, por ello mismo, exige previa homologación judicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 70, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, pueden conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con ocasión de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y contractual, previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, con fundamento en la Ley, la jurisprudencia¹ ha determinado los presupuestos para la aprobación de un acuerdo conciliatorio, los cuales son:

- 1.-** La acción no debe estar caducada (art. 61 Ley 23 de 1.991, modificado por el art. 81 Ley 446 de 1.998).
- 2.-** El acuerdo conciliatorio debe versar sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 Ley 23 de 1991 y 70 Ley 446 de 1.998).
- 3.-** Las partes deben estar debidamente representadas y sus representantes tener capacidad para conciliar.
- 4.-** El acuerdo conciliatorio debe contar con las pruebas necesarias, no ser violatorio de la ley y no resultar lesivo para el patrimonio público (art. 65 A Ley 23 de 1.991 y art. 73 Ley 446 de 1998).

Así las cosas, se tiene que la conciliación en materia de lo contencioso administrativo y su posterior aprobación, deben estar respaldadas con elementos probatorios idóneos y suficientes respecto del derecho objeto de controversia, de manera que no quede duda al juez de conocimiento que existen altas probabilidades de condena en contra de la administración, tanto en primera como en segunda instancia y que la aprobación del acuerdo conciliatorio resultaría provechosa para los intereses de las partes en conflicto.

¹ Ver entre otros, Consejo de Estado, providencia del 06 de diciembre de 2010, C.P. Olga Valle de la Hoz, Actor Álvaro Herney Ordoñez Hoyos y otros, Rad. 19001-23-31-000-2001-00543-01 (33462),

Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho procederá a analizar el cumplimiento de los presupuestos para determinar si resulta procedente o no, la aprobación de la conciliación extrajudicial celebrada entre las partes en la audiencia de celebrada el pasado 07 de marzo de 2022, ante la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos.

PRESUPUESTOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO

DECRETO 1818 DE 1998 / DECRETO 1716 DE 2009 ARTICULO 9 NUMERAL 5

1.- Que no haya operado el fenómeno de la caducidad.

Como quiera que el presente asunto se encuentra dirigido contra un acto producto del silencio administrativo surgido como consecuencia de la petición elevada por la convocante el día 28 de julio de 2021, el medio de control de nulidad y restablecimiento no está sujeto a caducidad, al tenor del artículo 164 numeral 1º literal d) de la Ley 1437 de 2011.

2.- Disponibilidad de los Derechos Económicos:

El tema que se debate hace referencia al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2016, como consecuencia del retardo en el pago de unas cesantías parciales.

En este orden de ideas, es menester indicar que la cesantía constituye una forma de remuneración laboral a favor de los trabajadores, las cuales deben ser canceladas en forma oportuna, en aplicación de lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, motivo por el cual el legislador estableció la sanción moratoria como una penalización económica contra el empleador, que tiene por objeto resarcir los daños que se causen al servidor público, por el retardo en el pago de dicha prestación económica, razón por la que no se *“erige como una prerrogativa prestacional en la medida que no busca proteger al trabajador de las eventualidades a las que puede verse sometido durante una relación laboral”*, si no como una penalidad².

En ese sentido, como quiera que no se está ante un derecho laboral cierto e indiscutible, las partes se encuentra facultadas para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, al tenor de lo preceptuado en el artículo 53 de la Constitución Política y a los que hace referencia la Ley Estatutaria al establecer la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, por ser un derecho de carácter meramente económico.

Al respecto, el Consejo de Estado sostuvo:

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Bogotá D.C. 18 de julio de 2018. Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018. Exp. 4691-2015.

*“(…) si bien es cierto de conformidad con el artículo 53 constitucional el trabajador tiene una limitación de carácter constitucional para la libre disposición de sus derechos laborales ciertos e indiscutibles por medio de transacción o conciliación, los derechos inciertos o discutibles, como puede ser en determinado momento el derecho a la sanción moratoria, sí pueden ser objeto de una transacción válida. En el caso sometido a consideración, el derecho innegable e incuestionable que no es susceptible de transacción o conciliación es el de las cesantías. **La sanción moratoria, sí es objeto de tales mecanismos alternativos de solución de conflictos laborales dado que no es una prestación social en sí misma, sino una penalidad por el incumplimiento de una obligación (...)**”³ (Negrilla del Despacho).*

3.- Representación de las partes y capacidad para conciliar:

Las partes se encuentran representadas legalmente a través de apoderados judiciales, de conformidad con los poderes que les han sido otorgados, por parte de la señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria, se encuentra representada por el doctor Yohan Alberto reyes Rosas, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.176.894 y T.P. No. 230.236 del C. S de la J, según memorial poder visible a folio 4 del documento 02 del expediente digital, en el cual se otorgó la facultad expresa de conciliar.

Por parte de la Nación - Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, se encuentra que está representada judicialmente por la doctora Edid Paola Orduz Trujillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.008.202 y T.P. No. 213.648 del C. S de la J, según poder de sustitución otorgado por el doctor Luis Alfredo Sanabria Ríos, identificada con cédula de ciudadanía No. 80.211.391 y T.P. No. 250.292 del C. S de la J, visible a folios 54 y 55 del documento 02 del expediente digital, a quien se le otorgó la facultad de conciliar.

4.- Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley y no resulte lesivo para el patrimonio público:

4.1.- Respaldo probatorio de lo reconocido:

Advierte el Despacho que dentro del plenario se encuentra debidamente acreditado que:

a) La señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria, mediante derecho de petición fechado el 11 de julio de 2019, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales para construcción de vivienda, como docente de vinculación municipal al servicio de la Secretaria de Educación del municipio de Santiago de Cali.

b) En virtud de lo anterior, la Secretaria de Educación del municipio de Santiago de Cali, mediante la Resolución No. 4143.010.21.0.05298 del 17 de julio de 2019, ordenó el reconocimiento y pago por parte del Fondo Nacional de Prestaciones

³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil siete (2007); Radicación número: 673001-23-31-000-2000-02858-01(2974-05).

Sociales del Magisterio y a favor de la convocante, de la suma de \$ 21.777.747, por concepto de cesantías parciales. En este acto administrativo se indicó que se debía de hacer la remisión correspondiente a al Previsora S.A., para que inicie el proceso de pago respectivo.

c) Según lo indicado en la parte considerativa de la Resolución No. 4143.010.21.0.8650 del 30 de octubre de 2019, se devolvió la prestación económica en estado NEGADO, con observaciones en la hoja de revisión No. 1823006 del 17 de octubre de 2019, consistente en una inconsistencia en la liquidación realizada por la Secretaria de Educación del municipio de Santiago de Cali. Es por esta razón, que se expide un según acto administrativo, esto es la Resolución No. 4143.010.21.0.8650 del 30 de octubre de 2019, a través de la cual se ordena dar cumplimiento a lo determinado por la Fiduprevisora S.A. y ordena realizar a favor de la señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria, el pago de la suma de \$ 21.735.327, por concepto de cesantías parciales. Este acto administrativo, se notificó de manera personal a la demandante el 05 de noviembre de 2019.

d) La suma antes indicada, quedó a disposición de la señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria, a partir del 16 de diciembre de 2019, según se desprende del comprobante de pago del Banco BBVA, visible a folio 40 del documento 02 del expediente electrónico del proceso.

e) Mediante petición radicada el día 28 de julio de 2021, solicitó ante la Secretaria de Educación del municipio de Santiago de Cali – Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de las cesantías parciales reconocidas a través de la Resolución No. 4143.010.21.0.05298 del 17 de julio de 2019.

4.2.- Acuerdo conciliatorio no violatorio de la ley y no lesivo para el patrimonio público:

La Sala Plena de la Sección Segunda, órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el 18 de julio de 2018 se pronunció mediante Sentencia de Unificación por importancia jurídica, considerando que en los casos como el presente relacionados con la aplicación de la ley 1071 de 2006 a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es procedente la aplicación de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas, previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, fijando para ello las siguientes reglas jurisprudenciales⁴:

“3.5. Reglas jurisprudenciales que se dictan en la sentencia. -

192. Considerando el auto del 1 de febrero de 2018, por el cual, el pleno de la Sección Segunda avocó conocimiento del presente asunto, con el fin de emitir pronunciamiento sobre los siguientes aspectos:

⁴ Consejo de Estado, Sección Segunda, **Sentencia de unificación por Importancia jurídica CE-SUJ-SII-012-2018, SUJ-012-S2**, Bogotá D.C., 18 de julio de 2018, Expediente: 73001-23-33-000-2014-00580-01, No. Interno: 4961-2015, Demandante: Jorge Luis Ospina Cardona, Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Tolima.

1) ¿Cuál es la naturaleza del empleo de docente del sector oficial y si le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus modificaciones?

2) En el evento en que la administración guarde silencio frente a la solicitud de reconocimiento de las cesantías definitivas o parciales, o se pronuncie de manera tardía. ¿A partir de qué momento se hace exigible la sanción por mora?

3)Cuál es el salario a tener en cuenta para liquidar la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas y parciales, prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006?

4) Es procedente la actualización del valor de la sanción moratoria una vez se dejó de causar hasta la fecha de la sentencia que la reconoce?

193. En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales:

3.5.1 **Unificar jurisprudencia** en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el **docente oficial**, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

3.5.2 **Sentar jurisprudencia** precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley⁵ para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al petionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el petionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se **sienta jurisprudencia** precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

⁵ Artículos 68 y 69 CPACA.

3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del CPACA.”

Del precedente jurisprudencial que antecede se concluye que actualmente la Sección Segunda del H. Consejo de Estado en posición unánime considera procedente la aplicación de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas a favor de los docentes oficiales.

En el caso sub examine, según las pretensiones referidas en el escrito de solicitud de conciliación extrajudicial, la controversia gira en determinar si la actora como docente tiene derecho al pago de la sanción moratoria de que trata la ley 1071 de 2006.

El Consejo de Estado sentó jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corren 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago, lo que genera la sanción consagrada en el parágrafo del art. 5 de la ley 1071 de 2006, la cual corresponde a un día de salario por cada día de retardo.

Resulta claro entonces que con posterioridad a los 70 días hábiles de presentada la solicitud de reconocimiento de cesantías sin que se efectúe el pago de las mismas, se configura la sanción moratoria.

En la providencia de unificación referida, se establecieron las diferentes hipótesis que se pueden presentar y que deben tenerse en cuenta para efectos de proceder al reconocimiento de la sanción moratoria, así:

HIPÓTESIS	NOTIFICACION	CORRE EJECUTORIA	TÉRMINO PAGO CESANTÍA	CORRE MORATORIA
PETICIÓN SIN RESPUESTA	No aplica	10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto	45 días posteriores a la ejecutoria	70 días posteriores a la petición
ACTO ESCRITO EXTEMPORANEO (después de 15 días)	Aplica pero no se tiene en cuenta para el computo del termino de pago	10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto	45 días posteriores a la ejecutoria	70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO EN TIEMPO	Personal	10 días, posteriores a la notificación	45 días posteriores a la ejecutoria	55 días posteriores a la notificación
ACTO ESCRITO EN TIEMPO	Electrónica	10 días, posteriores a certificación de acceso al acto	45 días posteriores a la ejecutoria	55 días posteriores a la notificación
ACTO ESCRITO EN TIEMPO	Aviso	10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso	45 días posteriores a la ejecutoria	55 días posteriores a la entrega del aviso
ACTO ESCRITO EN TIEMPO	Sin notificar o notificado fuera de término	10 días, posteriores al intento de notificación personal ⁶	45 días posteriores a la ejecutoria	67 días posteriores a la expedición del acto
ACTO ESCRITO	Renunció	Renunció	45 días después de la renuncia	45 días desde la renuncia
ACTO ESCRITO	Interpuso recurso	Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve	45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria	46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso
ACTO ESCRITO, RECURSO SIN RESOLVER	Interpuso recurso	Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso	45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria	61 días desde la interposición del recurso

De conformidad con lo anterior y atendiendo previsto en el artículo 4° de la ley 1071 de 2006, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías parciales o definitivas, por tanto, al tenerse que la solicitud de reconocimiento de cesantías se radicó el día 11 de julio de 2019, y, el acto administrativo de reconocimiento, esto es, la Resolución No. 4143.010.21.0.8650, se profirió el 30 de octubre de 2019, debe concluirse que la entidad accionada incumplió con el término perentorio consagrado en dicho articulado, ya que tenía hasta el 01 de agosto de 2019, para expedir el respectivo acto administrativo.

En virtud de lo anterior y dada la tardanza en el trámite adelantado por la entidad accionada para proceder al reconocimiento de las cesantías definitivas solicitadas por la parte convocante, es del caso contabilizar los términos con los que contaba la administración para cancelar la prestación señalada, a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se radicó la solicitud de la prestación⁷.

Teniendo en cuenta lo anterior, es menester indicar que, en el caso en concreto, los términos se surtieron así:

⁶ Se consideran los supuestos de los artículos 68 y 69 del CPACA según los cuales, la entidad tuvo 5 días para citar al peticionario a recibir notificación personal, 5 días más para que comparezca, 1 día para entregarle el aviso, y 1 día para perfeccionar la notificación por este medio. Estas diligencias totalizan 12 días.

⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Bogotá D.C. 18 de julio de 2018. Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018. Exp. 4691-2015.

- 1.- La solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías, se radicó el día 11 de julio de 2019, esto es en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
- 2.- El término de quince (15) días hábiles para proferir el acto de reconocimiento de las cesantías, en virtud de lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1071 de 2006, se venció el 01 de agosto de 2019.
- 3.- Los diez (10) días para la firmeza del acto administrativo de reconocimiento prestacional, fenecieron el 16 de agosto de 2019⁸.
- 4.- El término de los cuarenta y cinco (45) días, de que trata el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, para efectuar el pago de las cesantías, se surtió del 20 de agosto de 2019 al 22 de octubre de 2019.

A partir de lo anterior, puede indicarse que el término de los setenta (70) días con los que contaba el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para proceder al pago de las cesantías parciales reconocidas a favor de la señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria, a través de la Resolución No. 4143.010.21.0.8650 del 30 de octubre de 2019, se surtió del 12 de julio de 2019 al 22 de octubre de 2019, motivo por el cual se logra establecer, que se causó una mora entre el 23 de octubre de 2019 y el 16 de diciembre de 2019, fecha en el que se puso a disposición de la convocante el dinero correspondiente a sus cesantías parciales, esto es, 54 días calendario de mora.

Fecha petición	11 de julio de 2019
Término máximo	70 días
Vencían 70 días	22 de octubre de 2019
Fecha Inicio Mora	23 de octubre de 0019
Fecha pago	16 de diciembre de 2019
Días de mora	54
Salario básico	\$ 3.303.158
Salario básico diario	\$ 110.105
Total Sanción 100%	\$ 5.945.84
% de Conciliación 90%	\$ 5.351.116

Precisado lo anterior, pasa el Despacho a revisar la fórmula presentada por la parte demandada, con fundamento en el proyecto de liquidación de la sanción, en la que se observa que el Ministerio convocado hizo el siguiente cálculo:

Fecha de solicitud de las cesantías:11 de julio de 2019
Fecha de pago:16 de diciembre de 2019
No. de días de mora: 69
asignación básica aplicable: \$3.303.158
Valor de la mora: \$7.597.245
Propuesta de acuerdo conciliatorio 90%: **\$ 6.837.520**

⁸ Aquí, debe tenerse en cuenta que la petición de reconocimiento y pago de las cesantías, fue radicada por la parte actora en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En la certificación expedida el día 16 de febrero de 2022, por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación del Ministerio de Educación Nacional, en donde la entidad convocada elevó la formula conciliatoria antes descrita, no se indicó los tiempos de mora que arrojaron como resultado 69 días de mora. Sin embargo, del contenido del acuerdo conciliatorio, se evidencia que la representante del Ministerio Público, al momento de calcular la liquidación de la sanción moratoria, señaló que la mora transcurrió entre el 08 de octubre de 2019 y el 16 de diciembre de 2019, periodo que según los cálculos aritméticos efectuados arroja una mora de 69 días. Se aclara que en dicho documento no se plasmó de donde provenía el cálculo efectuado a partir del 08 de octubre de 2019.

En este contexto, se evidencia que existe una diferencia de quince (15) días adicionales de mora, entre el cálculo realizado por esta operadora judicial (54 días de mora) y el cálculo realizado por las partes y la representante del Ministerio Público en audiencia de conciliación extrajudicial celebrada el 07 de marzo de 2022 (69 días de mora), lo cual arroja una diferencia en pesos de \$ **1.486.404**, conllevando tal aspecto a improbar el acuerdo conciliatorio, en razón a que resulta lesivo al patrimonio público, si se tiene en cuenta que la entidad convocada, Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pretende reconocer una suma de dinero que no se ajusta a los elementos probatorios aportados con la solicitud de conciliación extrajudicial y a los parámetros fijados por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018.

Así las cosas, se tiene que el acuerdo conciliatorio no cumple con la totalidad de los presupuestos exigidos jurisprudencialmente, pues quedó acreditado que dicho acuerdo afecta el patrimonio público, al efectuarse la liquidación de la sanción moratoria reconocida a favor de la señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria, por más días de los que corresponden legalmente.

En virtud de lo anterior, se procederá a improbar el acuerdo conciliatorio celebrado entre los apoderados judiciales de la señora Astrid del Pilar Betancourt Gaviria y de la entidad convocada, Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en audiencia de conciliación extrajudicial celebrada el 07 de marzo de 2022, ante la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos.

En consecuencia el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

R E S U E L V E

PRIMERO: IMPROBAR LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de fecha 07 de marzo de 2022, celebrada ante la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos, entre los apoderados judiciales de la señora **ASTRID DEL PILAR BETANCOURT GAVIRIA** y de la **NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, envíese copia de este proveído a la PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente y háganse los registros respectivos en el sistema de gestión judicial SIGLO XXI.

CUARTO: Este juzgado acatando el deber consagrado en el art. 2º ídem, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
mecaicedo@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO}
JUEZ

LCMS.}

Firmado Por:

Paola Andrea Gartner Henao
Juez
Juzgado Administrativo
Oral 001
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **afd8ddb13c1edaee96da1bb73f8551cf0eff2860827f64688d3f012ee21a870e**

Documento generado en 11/03/2022 03:48:10 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>